



Year 1901—Office, 21, Allen St

Año 1901—Oficinas, calle Allen, 21

Official subscriptions	\$1.75 per month
Private	1.25
Single copy (date of issue).....	.10
— (old date).....	.20
Advertisements10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan P. R. as Second class matter.

Year 1901

San Juan Puerto-Rico, Wednesday November 20th

No. 271

IMPORTANTE.

Ponemos en conocimiento de los Sres. que utilizan la "Gaceta de Puerto-Rico" para la publicación de Edictos judiciales, en asuntos de partes, que publicado por primera vez y no satisfecho su importe, se suspenderán las otras dos publicaciones.

Puerto-Rico, 9 de Octubre de 1901.

Sucesores de J. J. Acosta,
Proprietarios y Editores de la
"Gaceta de Puerto-Rico."

PARTE OFICIAL

The People of Porto Rico

To all persons to whom these Presents shall come, GREETING:

Whereas, before District Court of Humacao in the month of Juan Socorro was convicted of the crime of assault and thereupon was sentenced by the said Court to imprisonment for a term of 7 months 1 day & part of which sentence remains unexecuted; and

Whereas it satisfactorily appears to me that this is a proper case for the exercise of executive clemency;

Now Therefore; I, CHARLES HARTZELL, acting Governor of Porto Rico, by virtue of the authority in me vested by law, do hereby pardon the said Juan Socorro from any further imprisonment under the sentence aforesaid, and order that he be immediately released from custody. This pardon is issued based rufinly upon his physical condition, and promise to let drink alone, should he recours.

In Witness Whereof I have hereunto set my hand at San Juan, Porto Rico, this 15th day of November, 1901.

CHAS. HARTZELL.

By the Acting Governor
Arthur E. Parks.
Assistant Secretary.

I hereby certify the above to be a true copy of pardon issued this day by the Governor of Porto Rico, the records of which are on file in this office.

Arthur E. Parks.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á siete de Octubre de mil novecientos uno, en el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de Mayagüez por Don Abad Velez Balagner propietario, vecino de las Marías, contra Don Rodrigo Ramirez Vigo, cesionario de sucesores de Esmoris y O^a y la sucesión de Don Andrés Gonzalez, representada por su viuda D^a Filomena Velez, sobre tercería de dominio á bienes embargados por aquella sociedad á esta sucesión, cuyo pleito pende ante Nos, á virtud de recurso de casación por infracción de ley que ha interpuesto Don Rodrigo Ramirez Vigo, representado y defendido por el Letrado Don Rafael Palacios Rodriguez, sin que hayan comparecido ante este Tribunal las demás partes del juicio.

Resultando que en juicio verbal civil seguido por sucesores de Esmoris y O^a contra D^a Filomena Velez, viuda de Gonzalez, como representante de la sucesión de su esposo Don Andrés Gonzalez, en cobro de pesos, fué condenada al pago la sucesión demandada con las costas de juicio, habiéndose embargado para el

cumplimiento de la sentencia, una finca rústica de diez y siete cuerdas de terreno más ó menos radicadas en el barrio de Maravilla, del término municipal del pueblo de las Marías, sembradas á café, con casa habitación, terrera, de maderas del país, techada de zinc; colindando al Norte con Martin Faisca y Raimundo Echevarría, hoy su sucesión, al Este con Santiago Rodriguez; al Sur con Inocencio Colón, y al Oeste con Don Marcial Lavergna.

Resultando que Don Abad Velez Balagner, con fecha nueve de Agosto del año último, dedujo ante el Tribunal de Distrito de Mayagüez demanda sobre tercería de dominio contra sucesores de Esmoris y O^a y contra la sucesión de Don Andrés Gonzalez, representada por su viuda Doña Filomena Velez, reclamando como de su propiedad la finca embargada, á cuyo fin, además de los hechos ya expuestos, alegó que dicha finca estaba inscrita á su favor en el Registro de la Propiedad de Mayagüez mediante información posesoria promovida al efecto, según certificación, acompañada á la demanda; invocó como fundamentos de derecho los artículos 348 y 446 del Código Civil y los 459 y 1533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y concluyó con la súplica de que por sentencia se declarara con lugar la demanda, alzándose en su consecuencia el embargo de la finca en cuestión, con las costas del juicio á cargo de sucesores de Esmoris y O^a.

Resultando que con suspensión del procedimiento de apremio en el juicio verbal de que se deja hecho mérito, se confirió traslado de la demanda á sucesores de Esmoris y O^a y á la sucesión de Don Andrés Gonzalez, representada por su viuda, la cual prestó su allanamiento á aquella, impugnándola Don Rodrigo Ramirez Vigo, como cesionario de los derechos de sucesores de Esmoris y O^a, según escritura pública de veinte y nueve de Agosto ya citado, á cuyo fin alegó que la certificación de inscripción de un expediente posesorio que se acompañaba á la demanda, aparte de no constar su autenticidad, no era título de dominio, sino de posesión, sin que por tanto sea dueño el tercerista de la finca embargada; recomendó como fundamentos de derecho los artículos 1530 y 1535 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias del Tribunal Supremo de España de 28 de Abril de 1870, 13 de Abril de 1882 y 5 de Febrero de 1883, el artículo 3^o en relación con el 2^o de la Ley Hipotecaria, y la regla 62 de la Orden General No. 118, serie de 1899; y suplicó se declarara por sentencia sin lugar la demanda, con imposición de costas á la parte actora.

Resultando que á instancia de ambas partes se practicaron pruebas, figurando entre las de Don Rodrigo Ramirez Vigo una certificación del Registro de la Propiedad de Mayagüez justificativa de haber sido inscrito en dicho Registro el expediente promovido por Don Abad Velez Balagner, para acreditar la posesión de la finca cuya propiedad reclama.

Resultando que el Tribunal de Mayagüez por sentencia de 7 de Febrero último declaró con lugar la demanda de tercería de dominio interpuesta, con las costas á cargo de Don Rodrigo Ramirez Vigo, como cesionario de sucesores de Esmoris y O^a, mandando en su consecuencia se alicé el embargo trabado sobre los bienes objeto de dicha tercería, en el juicio verbal civil que dió origen á la misma.

Resultando que Don Rodrigo Ramirez Vigo ha interpuesto contra la expresada sentencia recurso de casación por infracción de Ley, como comprendido en los números 1^o y 7^o del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ampliado éste por la regla 79 de la O. G. número 118, serie de 1899, alegando como motivos los siguientes:—Primero. Infracción del artículo 1530 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que las tercerías han de fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor, ó en el derecho del tercero á ser reintegrado en los mismos, de lo cual se desprende que la ley no reconoce los títulos posesorios como fundamentos de tercería de dominio.—Segundo. Infracción de la doctrina legal establecida por las sentencias del Tribunal Supremo de España de 28 de Abril

de 1870, 13 de Abril de 1882 y 5 de Febrero de 1883, las cuales estatuyen con toda claridad que para ser acreditado de dominio un título es necesario que reúna esa cualidad careciendo de eficacia sobre los bienes embargados cualquier otro título de posesión, sin que por tanto puedan reputarse títulos de dominio los expedientes posesorios.—Tercero. Infracción del artículo 3^o, en relación con el 2^o de la Ley Hipotecaria, de los cuales se desprende que los expedientes posesorios no son títulos de dominio, pues estos han de constar en escritura pública, ejecutoria ó documento auténtico, condiciones que no reúne el presentado por el demandante, para acreditar el dominio de la finca que es objeto de la tercería.—Cuarto. Infracción de los artículos 446 y 448 del Código Civil y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 23 de Febrero de 1899, por aplicación indebida, puesto que dichos artículos y sentencia solo se refieren al derecho que tiene el poseedor á ser respetado en su posesión y á que se le restituya en la misma, si fuere por alguna perturbación en ella, caso completamente distinto al del pleito, en el que se trata de una tercería de dominio que no cabe confundir con los interdictos de retener y recobrar.—Quinto. Error de derecho en la apreciación de la prueba puesto que el Tribunal inferior considera como título bastante para declarar el dominio una certificación con la que solo se acredita la posesión, y que por tanto no pasa de ser un título posesorio.—Sexto. Infracción del principio jurídico "Actore non probante, reus est absolvendus," consagrado como doctrina legal por el Tribunal Supremo de España en sentencias de 21 de Enero de 1867, 23 de Enero de 1869, 7 de Marzo de 1874 y 21 de Diciembre de 1882, puesto que el actor no ha probado el dominio sobre la finca embargada, y por consiguiente ha debido declararse sin lugar la tercería interpuesta.—Septimo. Infracción de la regla 63 de la Orden general número 118, serie de 1899, por que siendo impropio el juicio de tercería promovido por Don Abad Velez Balagner, éste ha debido ser condenado en las costas.—Visto siendo Ponente el Juez Asociado Don Louis Sulzbacher.

Considerando que al establecer el artículo 1530 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que las tercerías habrán de fundarse ó en el dominio de los bienes embargados al deudor, ó en el derecho del tercero á ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, nada prescribe sobre el título que ha de servirle de base, pues de ese particular se ocupa el artículo 1535 de la misma ley, preceptivo de que con la demanda de tercería deberá presentarse el título en que se funde, sin que determine cual ha de ser ese título ni si el de posesión es ó no bastante á los fines que se persiguen en la tercería de dominio; no habiendo sido infringido por tanto el expresado artículo 1530, al cual se ha ajustado el demandante, alegando tener dominio sobre los bienes embargados y fundando la tercería en ese dominio.

Considerando que las sentencias del Tribunal Supremo de España que se citan en el segundo motivo del recurso, no establecen como doctrina legal que carece de eficacia para interponer tercería de dominio sobre bienes embargados cualquier otro título que no sea de dominio; y que lejos de ser así es jurisprudencia de aquel Tribunal que aunque el tenedor de unos bienes no tenga título justificativo de dominio, siempre debe conservarlos, si alguno se los demanda y no prueba que le pertenecen, ó lo que es lo mismo, que todo poseedor debe ser mantenido en el goce de su derecho, mientras no haya otro que con un título mas robusto le dispute lo que posea; por cuyas razones es visto que carece de base la infracción alegada en la exposición de dicho motivo.

Considerando que el Tribunal sentenciador no ha calificado de título de dominio el expediente posesorio inscrito en el Registro de la Propiedad con que el tercerista justifica su derecho, pues la sentencia se funda en no haberse demostrado que los bienes litigiosos sean de la sucesión Gonzalez y si que Don Abad Velez lo